



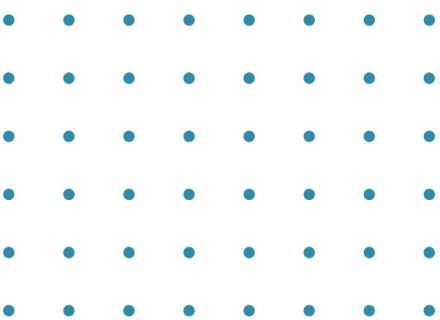
Informe jornada: “La reproducción de las desigualdades en la implementación de las políticas sociales”

**Núcleo de Estudios
Interdisciplinarios en Trabajo
Social
Enero 2026**



Fondecyt Regular
N° 1230925





Índice

- 3** **Introducción**

- 4** **Marco Conceptual: Reproducción de desigualdades en la implementación de políticas sociales**

- 8** **Metodología**

- 11** **Resultados:**
- 12** Dimensión 1: Herramientas y normas
- 13** Dimensión 2: Exigencias para las familias y/o usuarias
- 15** Dimensión 3: Decisiones y percepciones de los equipos de primera línea
- 16** Dimensión 4: Consecuencias no previstas de la participación

- 18** **Conclusiones**

- 21** **Agradecimientos**





Introducción

La jornada “La reproducción de las desigualdades en la implementación de las políticas sociales”, realizada el 26 de agosto de 2025 en la Plataforma Cultural del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, fue organizada por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social (NEITS) en el marco del proyecto de Núcleo “Lidiar con la implementación: reproducción de desigualdades en territorios extremadamente críticos” y el proyecto Fondecyt Regular N°1230925 “Los encuentros públicos entre profesionales de primera línea y usuarios de programas de asistencia social del Estado”.

El encuentro reunió a profesionales de primera línea que implementan el Programa Familias en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, junto con académicos/as y estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Chile, quienes participaron como facilitadores/as de los grupos de discusión. La jornada contó con la presentación del investigador brasileño Roberto Pires (IPEA, Brasil), quien introdujo su marco analítico sobre el riesgo de reproducción de desigualdades en la implementación de las políticas sociales. Su exposición sirvió como punto de partida para el trabajo colectivo, que combinó grupos de discusión y una plenaria de cierre orientada a identificar aprendizajes y desafíos para la implementación de las políticas sociales.

A partir de esta experiencia, el presente documento se organiza en cuatro apartados. En primer lugar, se presenta el marco conceptual que orienta la reflexión sobre la reproducción de desigualdades en la implementación de políticas sociales. En segundo lugar, se describe la metodología utilizada para el diseño y desarrollo de la jornada. En tercer lugar, se expone el análisis de los principales hallazgos y discusiones surgidos en los grupos de trabajo. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y proyecciones para futuros espacios de diálogo y colaboración.

Marco conceptual: reproducción de desigualdades en la implementación de políticas sociales

En contextos marcados por desigualdades estructurales y debilidad institucional, los procesos de implementación de políticas sociales pueden, de forma no intencionada, reproducir y profundizar las desigualdades sociales que buscan mitigar. Esta paradoja ha sido analizada por Roberto Pires (2019), quien plantea que, en lugar de neutralizar exclusiones preexistentes, las políticas pueden reforzarlas mediante efectos no previstos en la forma en que se organizan los servicios, se aplican las normas y se desarrollan las interacciones entre profesionales de primera línea y usuarias/os.



A partir de una perspectiva interseccional y multidimensional de la desigualdad social, se reconoce que la implementación no es un proceso meramente técnico o administrativo, sino un espacio de producción de efectos sociales - materiales y simbólicos - que pueden generar acumulación de desventajas a lo largo del tiempo. El trabajo coordinado por Roberto Pires en el libro "Implementando Desigualdades" profundiza precisamente en cómo las actividades cotidianas de prestación de servicios públicos pueden engendrar riesgos de reproducción de desigualdades, articulando las dinámicas de implementación con efectos materiales (en el acceso o la calidad de las prestaciones) y simbólicos (en términos de estigmatización, humillación o pérdida de reconocimiento).

Si bien este enfoque ha sido ampliamente aplicado al análisis de la fase de implementación, es importante precisar que el modelo desarrollado por Pires es más amplio. Su propuesta considera que el riesgo de reproducción de desigualdades también puede originarse en dimensiones relacionadas con el diseño institucional de los procesos de implementación, así como con las formas de gobernanza que estructuran la relación entre niveles de gobierno, sectores y actores responsables de ejecutar las políticas públicas.

En este marco más general, la implementación es uno de los espacios privilegiados donde estos riesgos se manifiestan de forma concreta, a través de prácticas cotidianas, interacciones entre funcionarios y usuarios/as, y decisiones situadas que pueden generar consecuencias diferenciadas según el grupo social al que se pertenece.

Una contribución clave de este enfoque es su traducción en herramientas operativas dirigidas a equipos de implementación. INCLUA es una plataforma de IPEA (<https://inclua.ipea.gov.br>) que reúne guías, materiales de apoyo, dinámicas y un módulo de diagnóstico para identificar y enfrentar riesgos de desatención, exclusión y trato inadecuado en los servicios públicos. En este marco se sitúa la Guía INCLUA – Avaliação de Riscos de Reprodução de Desigualdades na Implementação de Políticas Públicas, coordinada por Pires y su equipo en el IPEA, que propone un proceso de diagnóstico situacional estructurado en dimensiones, indicadores y preguntas de autorreflexión para identificar, evaluar y jerarquizar riesgos que afectan a segmentos específicos de la población, históricamente situados en posiciones de desventaja.



En la jornada aquí analizada, y dado su foco en la experiencia de profesionales de primera línea, el trabajo se centró en esta dimensión específica del modelo: las prácticas de implementación y las interacciones en los servicios sociales. Para ello se utilizaron cuatro dimensiones analíticas propuestas por Pires para examinar cómo se producen mecanismos de reproducción de desigualdades a nivel local:

1. Herramientas y normas

Los instrumentos técnicos (protocolos, sistemas de registro, indicadores, formularios) portan visiones implícitas sobre los/as usuarios/as y no son neutrales. Pueden facilitar el acceso para ciertos perfiles y dificultarlo para otros, invisibilizando realidades diversas o reforzando estereotipos sociales.

2. Exigencias para las familias y/o usuarias

Para acceder o permanecer en un programa, las personas deben cumplir exigencias que, en contextos de vulnerabilidad, se traducen en costos adicionales de tiempo, dinero, información o esfuerzo. Estas exigencias, aunque no siempre están en el diseño formal, emergen en la práctica cotidiana y pueden operar como barreras de exclusión.

3. Decisiones y percepciones de los equipos de primera línea

Los/as profesionales de primera línea, enfrentados/as a múltiples demandas y recursos limitados, desarrollan criterios informales para priorizar, filtrar o excluir a usuarios/as. Estas clasificaciones, a menudo respaldadas por estereotipos, determinan quién es considerado/a "merecedor/a" del servicio, reproduciendo inequidades.

4. Consecuencias no previstas de la participación

Participar en programas sociales puede conllevar efectos imprevistos, como la exposición pública, el juicio moral, la pérdida de autonomía o el sentimiento de deuda simbólica hacia el Estado. Estos efectos simbólicos, al no ser monitoreados, pueden erosionar el vínculo con la política pública y reforzar posiciones de subordinación social.

Desde esta perspectiva, la implementación se configura como un espacio donde no solo se ejecuta una política, sino donde se reconfiguran jerarquías sociales, se consolidan o tensionan relaciones de poder, y se definen los límites entre inclusión y exclusión. Reconocer estos mecanismos es fundamental para anticipar y mitigar los riesgos de reproducción de desigualdades, fortalecer la capacidad inclusiva de las políticas y avanzar hacia formas de gestión más sensibles a las trayectorias y condiciones de vida de los grupos destinatarios.



Relevancia para los equipos de implementación

Este enfoque no busca responsabilizar a los equipos locales por las desigualdades que emergen durante la implementación, sino reconocer su rol estratégico en la identificación, mitigación y transformación de dichas desigualdades. Herramientas como el Guía INCLUA muestran cómo el conocimiento situado de los/as profesionales de primera línea puede convertirse en insumo central para la evaluación de riesgos, el diseño de intervenciones y el monitoreo de sus efectos, mediante procesos de autorreflexión estructurados y el uso de recursos para la acción. En efecto, son los/as profesionales de primera línea quienes, desde su experiencia cotidiana, pueden anticipar efectos no deseados, adaptar prácticas y promover formas más inclusivas y justas de gestión. Incorporar estas reflexiones en los espacios institucionales es clave para fortalecer el vínculo entre política pública, territorio y ciudadanía, y para alinear los objetivos de equidad que orientan las políticas sociales con las condiciones concretas de su implementación.

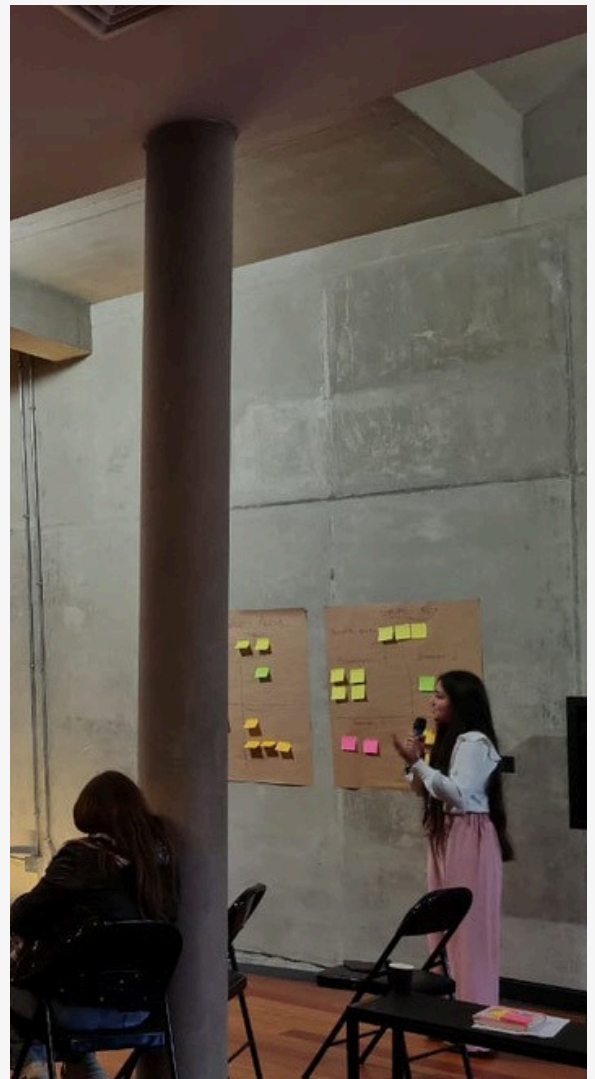
El análisis de esta jornada considera dos niveles complementarios. Por una parte, se describe la metodología de la jornada reflexiva, entendida como el dispositivo de trabajo colectivo que convocó a los equipos de primera línea y definió las dinámicas de discusión. Por otra, se presenta la metodología del análisis, que da cuenta de los procedimientos utilizados para trabajar el material producido en la jornada (registros de grupo y notas de facilitación) y construir las categorías que organizan los resultados.

Metodología de la jornada reflexiva

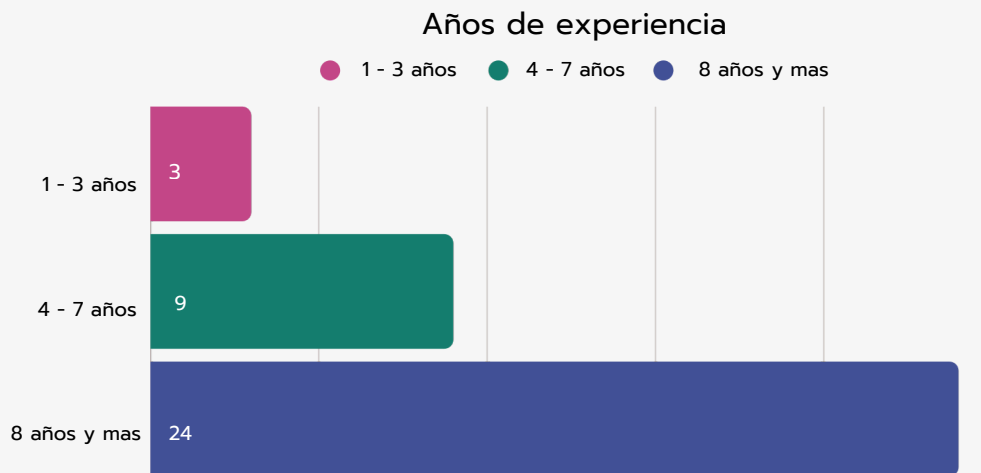
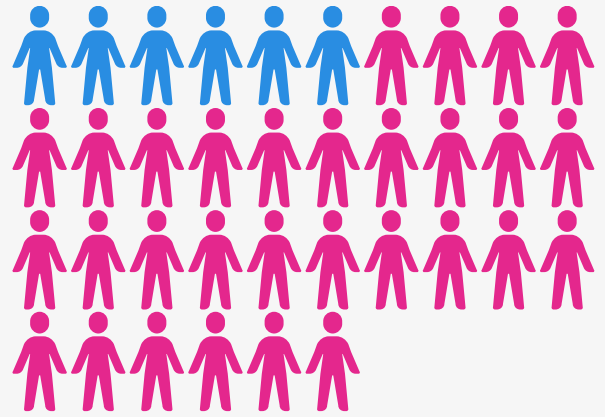
La jornada se estructuró en tres momentos. En la primera parte, se presentó el marco analítico de Roberto Pires sobre el riesgo asociado a la implementación de las políticas sociales. Luego, los/as participantes se dividieron en cinco grupos de entre seis y ocho personas, que discutieron una pregunta disparadora general: “¿Existen aspectos del diseño o de la implementación del programa que consideren que generan o refuerzan desigualdades?”.

A continuación, la discusión se organizó en torno a las cuatro dimensiones trabajadas en el apartado anterior: (1) herramientas y normas del programa, (2) exigencias para las familias/usuarios, (3) clasificaciones y juicios de los equipos de primera línea y (4) consecuencias no previstas de la participación.

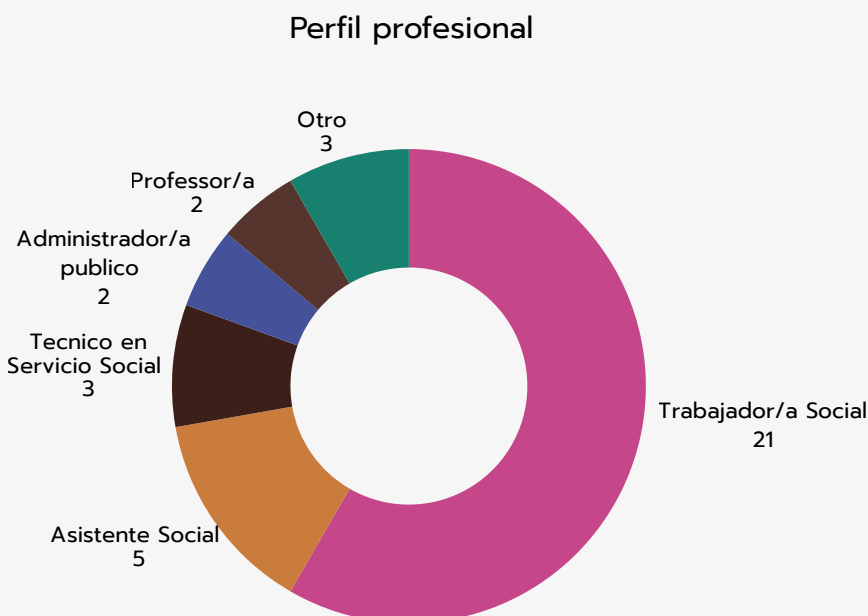
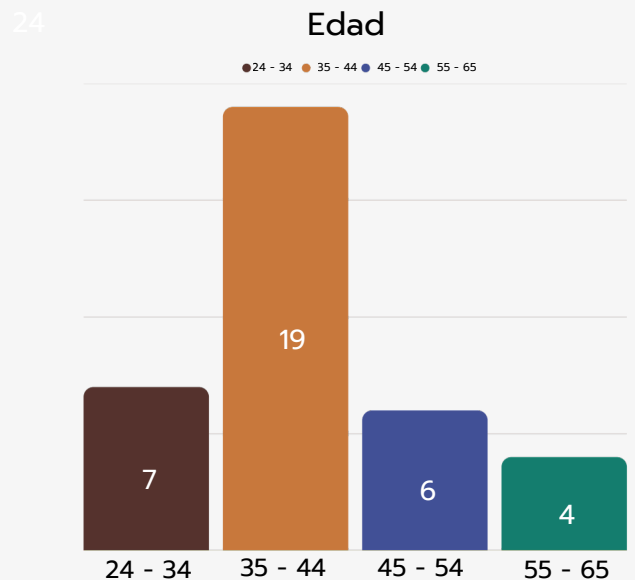
Cada grupo contó con la facilitación de estudiantes del proyecto de núcleo “Lidiar con la implementación: reproducción de desigualdades en territorios extremadamente críticos”, quienes, además, sintetizaron las discusiones en una hoja de registro. Las conclusiones se compartieron posteriormente en una plenaria final, en la que se discutieron colectivamente los resultados y se elaboraron interpretaciones comunes. La dinámica se caracterizó por un enfoque horizontal y colaborativo, centrado en la experiencia situada de los equipos territoriales como fuente legítima de conocimiento.



Participaron 36 profesionales vinculados al Programa Familias, provenientes de comunas urbanas y rurales de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. La mayoría eran mujeres y contaban con amplia experiencia laboral: 24 tenían más de ocho años de trayectoria, 9 entre cuatro y siete años, y 3 menos de tres años.



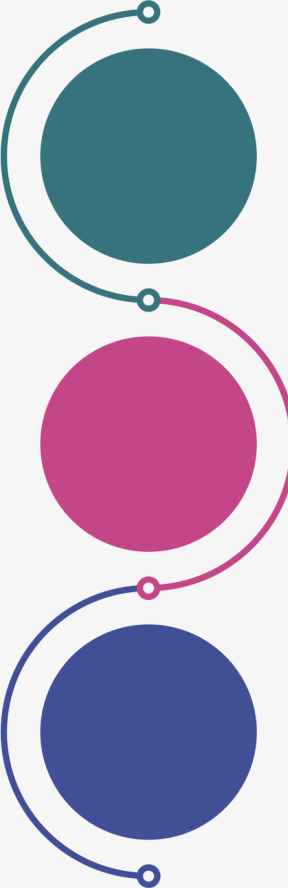
Entre los perfiles formativos se incluyeron trabajadores/as sociales, asistentes sociales, técnicos/as en servicio social, administradores/as públicos, profesores/as, un/a psicólogo/a, un/a terapeuta ocupacional y un/a abogado/a.



Metodología del análisis

El análisis posterior se realizó a partir de las hojas de registro de los cinco grupos y de las notas de los/as facilitadores/as. Se aplicó un análisis temático (Braun y Clarke, 2006), que permitió identificar patrones de sentido y diferencias en las experiencias relatadas.

El proceso analítico se desarrolló en tres etapas:

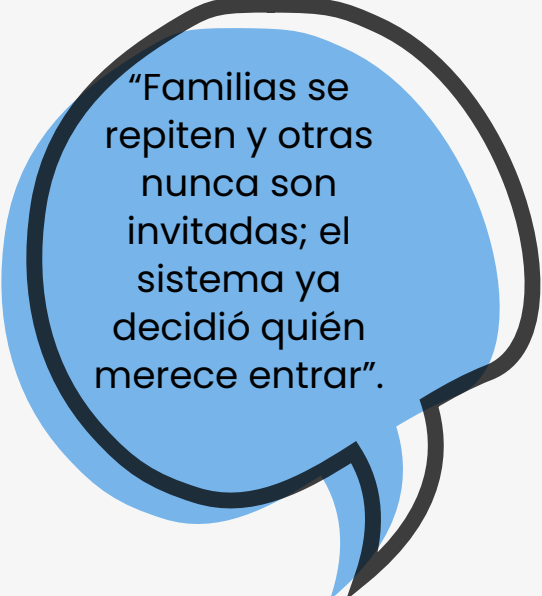
- 
1. Lectura y codificación inicial de los registros, con énfasis en la pregunta disparadora y en las cuatro dimensiones analíticas trabajadas en la jornada.
 2. Agrupamiento temático, organizando los códigos en núcleos de sentido en torno a mecanismos de reproducción de desigualdades percibidos por los equipos.
 3. Interpretación transversal, poniendo en diálogo los temas emergentes con el marco conceptual de Pires y las discusiones teóricas sobre reproducción de desigualdades en la implementación de políticas sociales.

Este procedimiento permitió construir categorías analíticas que articulan los aportes de los equipos de primera línea con el modelo conceptual trabajado en la jornada. En coherencia con ello, los hallazgos se presentan organizados según las cuatro dimensiones analíticas: herramientas y normas, exigencias hacia las familias, decisiones y percepciones de los equipos de primera línea, y consecuencias no previstas de la participación.

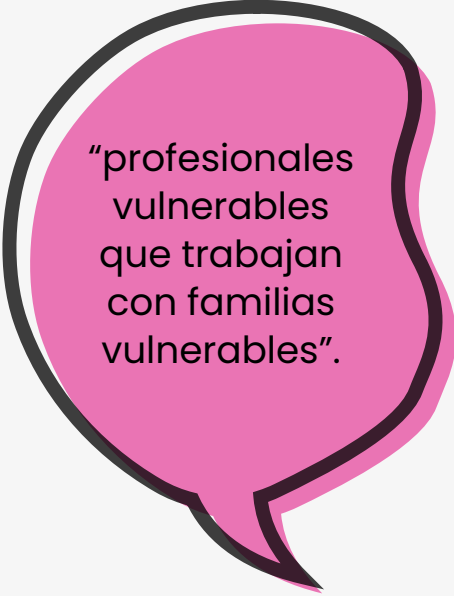
Pregunta disparadora: Aspectos del diseño e implementación que reproducen desigualdades

La discusión inicial permitió identificar una comprensión compartida entre las y los participantes: las desigualdades se reproducen desde dentro del propio aparato estatal, a través de los instrumentos, normas y condiciones laborales que estructuran la implementación. En los cinco grupos se coincidió en que los programas sociales, aunque orientados a la inclusión, operan bajo una lógica estandarizada, centralista y burocrática que impide reconocer la diversidad territorial y social de las familias.

La crítica más reiterada se dirigió al Registro Social de Hogares (RSH), descrito como una herramienta “manipulable, desactualizada y ciega a las condiciones reales”. Su uso como único criterio de focalización fue visto como un dispositivo que distribuye injusticias y erosiona la confianza entre usuarios/as y equipos.



“Familias se repiten y otras nunca son invitadas; el sistema ya decidió quién merece entrar”.



“profesionales vulnerables que trabajan con familias vulnerables”.

Junto con los sesgos del diseño, los equipos destacaron la precariedad institucional como un mecanismo estructural de desigualdad. Las condiciones laborales inestables, la sobrecarga de tareas y la ausencia de reconocimiento generan un círculo de vulnerabilidad entre quienes deben acompañar a familias vulnerables: Esta precariedad se traduce en rotación, pérdida de continuidad y debilitamiento de vínculos, con efectos directos sobre la calidad de la intervención.

En conjunto, las reflexiones de la pregunta disparadora muestran que las desigualdades no se limitan a los resultados de las políticas, sino que emergen en la forma en que el Estado define, mide y gestiona la pobreza, configurando una práctica que tiende a clasificar, moralizar y estandarizar la vida de las familias y de quienes las acompañan.

Dimensión 1: Herramientas y normas del programa

Los equipos coincidieron en que las herramientas técnicas —guías, formularios, indicadores y plataformas— no son neutrales, sino dispositivos que organizan la mirada del Estado sobre la pobreza. Las guías metodológicas y los sistemas de registro fueron descritos como “rígidos” y “poco contextualizados”, elaborados desde el nivel central y sin participación de los equipos territoriales.

El RSH se consolidó nuevamente como el símbolo de esa distancia institucional. Su rigidez y su énfasis en los ingresos dejan fuera dimensiones relevantes del bienestar, como las redes de apoyo, la salud mental o la violencia intrafamiliar. Este sesgo provoca una paradoja: los instrumentos destinados a garantizar equidad terminan homogeneizando realidades y generando exclusión.



Las y los profesionales relataron que gran parte de su trabajo consiste en “traducir” o “reacomodar” los instrumentos para que tengan sentido local. Este proceso, aunque creativo, traslada la responsabilidad del ajuste desde el nivel institucional hacia los equipos, que deben “hacer cuadrar el programa con las familias”. A su vez, los indicadores de cumplimiento tienden a privilegiar lo cuantitativo, invisibilizando logros cualitativos o procesos de transformación subjetiva.



Los y las participantes propusieron actualizar los instrumentos e incorporar variables territoriales y de salud mental, además de crear canales formales de retroalimentación con el nivel central. En términos analíticos, esta dimensión muestra cómo las herramientas de gestión operan como tecnologías de gobierno: producen legibilidad administrativa a costa de invisibilizar experiencias, reforzando desigualdades simbólicas entre quienes diseñan la política y quienes la implementan.

Dimensión 2: Exigencias hacia las familias y/o usuarias

En esta dimensión se examinó cómo los programas establecen condicionalidades explícitas e implícitas que, bajo la retórica de la corresponsabilidad, imponen cargas desiguales a las familias. Un hallazgo relevante fue que varios/as profesionales de primera línea afirmaron inicialmente que el Programa Familias no establece exigencias hacia las familias.

Sin embargo, muchas de estas afirmaciones iban acompañadas de valoraciones respecto de las personas usuarias, en las que se atribuía el resultado del acompañamiento a factores como el esfuerzo individual, la disposición a colaborar o las “gananas de salir adelante”. Este tipo de argumentación, aunque no esté formalmente inscrita en el diseño, configura una exigencia moral implícita, donde el acceso a derechos sociales se asocia al mérito percibido de las personas usuarias.



A medida que avanzó la reflexión grupal, surgieron otras miradas que identificaron exigencias concretas: disponibilidad de tiempo, necesidad de compatibilizar la participación con responsabilidades laborales y de cuidado, y cumplimiento de condicionalidades vinculadas a las transferencias monetarias. Estas exigencias, aunque no siempre explícitas en la normativa, operan en la práctica como barreras de acceso o permanencia, especialmente para mujeres trabajadoras o cuidadoras.

Las y los profesionales coincidieron en que el diseño del Programa Familias se orienta hacia una figura ideal de usuaria: la mujer cuidadora disponible en horario diurno. “El programa está hecho para la madre que se queda en casa, no para la que trabaja”, señaló una participante. Esta rigidez refuerza estereotipos de género y deja fuera a mujeres con empleos precarios o jornadas extensas.

Por otro lado, las propias profesionales del programa (Apoyos Familiares Integrales, AFIs) identificaron exigencias que recaen sobre ellas mismas y que consideran injustas o desproporcionadas. Entre las más mencionadas se encuentran el uso de herramientas personales —como redes, tiempo libre o recursos propios— para convencer a las familias de participar o cumplir con las actividades del programa. Esta situación traslada la responsabilidad del cumplimiento desde la política hacia la trabajadora, incrementando su carga emocional y operativa.



Asimismo, se discutieron las exigencias institucionales para ingresar a ciertos territorios, aun cuando estos han sido identificados por las AFIs como zonas de riesgo o peligrosidad. La ausencia de criterios claros o protocolos diferenciados refuerza la sensación de exposición e indefensión, afectando tanto la seguridad como el sentido de justicia en el ejercicio profesional.



En síntesis, esta dimensión muestra que, aun cuando no existan exigencias formales declaradas, la implementación del programa activa múltiples formas de exigencia —morales, prácticas y simbólicas— que afectan tanto a las familias como a quienes implementan la política. Estas exigencias reproducen desigualdades de género, clase y condiciones laborales, y evidencian cómo el diseño institucional distribuye de forma desigual las cargas del acompañamiento.

Dimensión 3: Decisiones y percepciones de los equipos de primera línea

Esta dimensión evidenció que las desigualdades también se producen en el nivel micro de la implementación, a través de los juicios morales y clasificaciones informales que los equipos elaboran sobre las familias. Expresiones como “familia pro”, “estrella”, “difícil” o “cacho” forman parte del lenguaje cotidiano y funcionan como herramientas de gestión simbólica frente a la sobrecarga de trabajo.

Los equipos reconocieron que estas categorías facilitan priorizar casos o anticipar comportamientos, pero también pueden consolidar procesos de diferenciación moral. Las familias más colaboradoras o agradecidas suelen recibir mayor atención o ser seleccionadas para representar el “éxito” institucional, mientras que aquellas con trayectorias más inestables son invisibilizadas. “Uno sabe con quién se puede trabajar y con quién no”, resumió un participante.



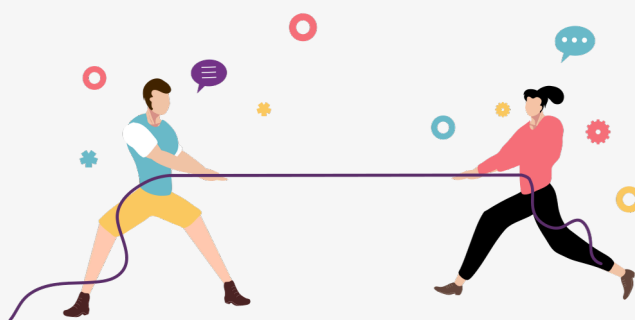
Estas prácticas no responden solo a prejuicios individuales, sino a condiciones estructurales de precariedad y presión por resultados. En contextos de alta demanda y escasos recursos, las etiquetas se vuelven mecanismos de supervivencia profesional. Sin embargo, su uso sistemático produce efectos simbólicos duraderos: clasifica a las familias según su “disposición al cambio” y legitima desigualdades dentro del propio sistema de atención.

Los grupos también reflexionaron sobre las tensiones emocionales que acompañan estas decisiones. El cansancio, la frustración y el miedo en territorios de riesgo influyen en la selección de casos y en la calidad de los vínculos. Esta dimensión, en clave teórica, muestra cómo la implementación se configura como un espacio moral y afectivo, donde los profesionales negocian constantemente entre el cumplimiento institucional y la empatía hacia las familias.

Dimensión 4: Consecuencias no previstas de la participación

La reflexión sobre las consecuencias no previstas permitió visibilizar efectos no deseados que surgen a partir de la participación en los programas. Entre los más señalados se encuentran la competencia entre familias por los beneficios, la estigmatización social y el desgaste profesional de los equipos.

La competencia emerge de la lógica de focalización y los cupos limitados, que generan comparaciones y desconfianza. “Los vecinos se pelean por quién queda y quién no”, explicó una trabajadora social. Este efecto, lejos de fortalecer el tejido comunitario, fragmenta los lazos locales y transforma el acceso a las políticas en un campo de disputa.



La estigmatización fue otro resultado recurrente. Ser beneficiario se asocia a debilidad o fracaso, lo que lleva a algunas familias a ocultar su participación. Estos efectos simbólicos revelan como la política pública puede, inadvertidamente, reforzar jerarquias y vulnerabilidades.

Por último, las y los profesionales identificaron la frustración institucional como una consecuencia transversal. La brecha entre las promesas del programa y los recursos disponibles genera desencanto tanto en las familias como en los equipos, erosionando la confianza en la acción estatal. En palabras de un participante:

“Prometemos más de lo que el Estado puede dar, y eso nos desgasta a todos”.

Esta dimensión permite observar que la implementación produce efectos colaterales que reconfiguran las relaciones entre Estado, profesionales y ciudadanía, mostrando que las políticas no solo distribuyen recursos, sino también significados y emociones. En conjunto, los resultados muestran que la reproducción de desigualdades en la implementación no es accidental, sino inherente a la forma en que el Estado organiza y gestiona la acción social. Los instrumentos definen qué se considera legítimo, las exigencias trasladan las cargas hacia los sujetos, las decisiones profesionales jerarquizan moralmente a los usuarios y las consecuencias no previstas multiplican las desigualdades que las políticas buscan reducir. Aun así, las voces recogidas también evidencian formas de resistencia y creatividad profesional: reinterpretar los instrumentos, flexibilizar las normas y mantener vínculos empáticos aparecen como estrategias para humanizar la política desde abajo. La implementación se revela así como un espacio contradictorio y profundamente político, donde la desigualdad no solo se administra, sino que también se disputa.



Conclusiones

El análisis de la jornada “La reproducción de las desigualdades en la implementación de las políticas sociales” muestra que las desigualdades no son un efecto externo o residual, sino que se configuran en los propios procesos de implementación. Los y las profesionales identifican que los programas sociales en Chile —en particular el Programa Familias— operan bajo una lógica de centralización, tecnificación y precarización, que genera efectos materiales, simbólicos y organizacionales que reproducen las mismas asimetrías que buscan mitigar.

1

Las herramientas e instrumentos de gestión aparecen como un mecanismo central de desigualdad. El Registro Social de Hogares, los formularios y los indicadores definen quién es legible para el Estado y qué formas de vida son reconocidas como elegibles. Su estandarización, diseñada sin participación territorial, tensiona permanentemente la relación entre la legibilidad burocrática y la realidad local, obligando a los equipos a “traducir” y adaptar informalmente los instrumentos.

2

Las exigencias hacia las familias expresan la dimensión moral de la política social. Bajo la retórica de la corresponsabilidad, las condicionalidades transforman derechos en deberes y sitúan a las familias —especialmente a las mujeres— en un régimen de demostración constante de compromiso. A la vez, las flexibilidades necesarias para sostener la participación se trasladan a los equipos, que asumen sobrecargas y extensiones de jornada.

3

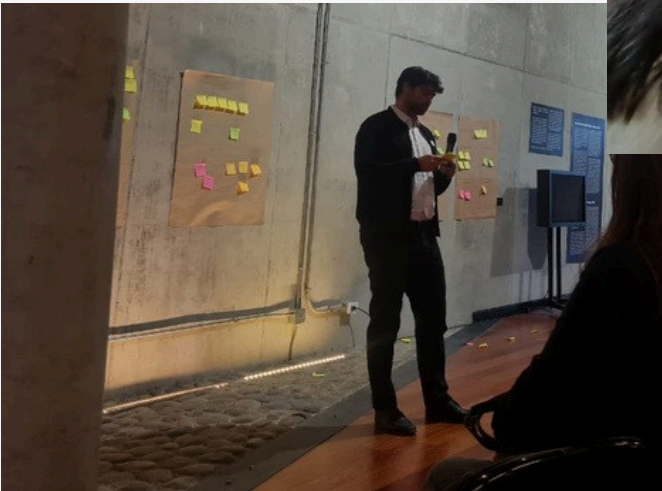
Las decisiones y percepciones de los equipos de primera línea muestran que la desigualdad también se produce en el nivel micro de la implementación, mediante prácticas de clasificación moral. Etiquetas como "familia pro", "estrella" o "difícil" ayudan a gestionar la sobrecarga y el riesgo, pero generan efectos simbólicos que jerarquizan a los usuarios según su ajuste al modelo institucional. En contextos de precariedad, estas categorías operan como protección profesional, a la vez que reponen distinciones entre familias "merecedoras" y "problemáticas", administrando y recreando desigualdades a través del juicio moral y la afectividad.

4

La discusión sobre las consecuencias imprevistas de la participación mostró que las políticas sociales generan efectos colaterales que exceden sus intenciones iniciales: competencia entre familias, estigmatización, desgaste emocional y desconfianza hacia las instituciones. Lejos de ser anomalías, estos efectos expresan un dispositivo que combina control y asistencia y en el que, como señalaron varios participantes, "prometemos más de lo que el Estado puede cumplir", produciendo frustración en usuarios y profesionales y erosionando la legitimidad estatal en los territorios.

En síntesis, los hallazgos muestran que la reproducción de desigualdades no se debe solo a falta de recursos o fallas de diseño, sino a un modo de gobernar la pobreza centrado en la focalización, la medición y la gestión por resultados. En este escenario, los equipos de primera línea sostienen el vínculo con las familias y amortiguan los efectos más duros de la política en condiciones precarias, pero también despliegan formas de agencia y resistencia al adaptar instrumentos, flexibilizar exigencias y priorizar el cuidado.

La experiencia de la jornada evidencia, sin embargo, los límites de instancias puntuales de reflexión. Un encuentro aislado no basta para transformar dinámicas arraigadas en normas, instrumentos y culturas organizacionales. Los resultados apuntan a la necesidad de procesos de formación sistemáticos y continuos para equipos de primera línea, que articulen marcos analíticos sobre reproducción de desigualdades, herramientas para la identificación de riesgos y espacios institucionalizados de reflexión colectiva.





Agradecimientos

Agradecemos profundamente a las y los profesionales de los equipos de implementación del programa Familias que participaron en la jornada. Su disposición a compartir experiencias, tensiones y reflexiones desde el trabajo cotidiano en los territorios hizo posible este ejercicio colectivo de análisis y aprendizaje.

También agradecemos al equipo FOSIS a nivel nacional —en especial a Pedro Ugalde—, así como a los equipos de la Región Metropolitana y de la Región de Valparaíso, por su apoyo, apertura e interés en desarrollar y sostener encuentros reflexivos como este.

Extendemos un agradecimiento especial a Roberto Pires, cuya presencia, generosidad intelectual y marco analítico sobre la reproducción de desigualdades en la implementación enriquecieron profundamente el diálogo y orientaron el enfoque de este trabajo.

Finalmente, agradecemos el trabajo de las y los estudiantes del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social y del proyecto, “Lidiar con la implementación: reproducción de desigualdades en territorios extremadamente críticos”, quienes colaboraron en la preparación, registro y sistematización de la jornada, y cuyo trabajo fue clave para la elaboración de este informe:

Victoria Cáceres, Nayareth Casino, Galia Carvajal, Martín Celis, Diego Escobar, Genesis Flores, Gabriela Garay, Benjamín Garrido, Trinidad Lara, Joan Melipil, Marjorie Molina, Paula Quiroz, Antonia Ramírez, Mahely Rosas, Damián Zamorano y Sol Zamorano

Equipo de investigación: Taly Reininger, Gianinna Muñoz y Myriam Vásquez

Para conocer más sobre el proyecto Fondecyt Regular N° 1230925 “Los encuentros públicos entre profesionales de primera línea y usuarios de programas de asistencia social del Estado” pueden contactar a la investigadora responsable:

Taly Reininger, tal.reininger@uchile.cl